

## **Panorama actual de la violencia juvenil en los contextos urbanos de Colombia**

*Pablo Alberto Ortega Poveda*

Este último capítulo presenta y discute desde una perspectiva comparada los principales hallazgos del libro en torno a la violencia juvenil en los contextos urbanos de Colombia. Estos resultados pueden servir como un punto de partida para futuras investigaciones sobre este tema en las ciudades estudiadas, así como un marco de análisis para lo que ocurre en otras urbes del país.

De igual forma, dado que uno de los principales hallazgos de este documento es la importancia que toma en estos momentos la criminalidad organizada y no el conflicto armado en las dinámicas de la violencia juvenil, es posible que los resultados del libro sean útiles, no sólo para evaluar los retos en la prevención de este fenómeno en un escenario posconflicto, sino también para contrastar la situación nacional con lo que ocurre en otras ciudades de América Latina.

El capítulo tiene la misma estructura de aquellos que abordan los casos de estudio: en primer lugar, se analizan las dinámicas generales de la violencia juvenil, tanto en lo concerniente a la participación de jóvenes en agrupaciones de violencia organizada como en los hechos violentos que más los afectan.

En segundo lugar, se discuten los principales factores de riesgo y protección asociados a este fenómeno, desde dos perspectivas diferentes: ¿qué lleva a los jóvenes a ser más vulnerables o resilientes frente a la opción de involucrarse en la violencia organizada?, y ¿qué pone en mayor riesgo o, por el contrario, protege a los jóvenes frente a la eventualidad de ser víctimas de violencia?

En tercer lugar, se presentan los principales resultados en torno a la “infraestructura” de prevención de la violencia juvenil instalada en cada uno de los casos y se analizan los factores que explican sus alcances y limitaciones.

Finalmente, se plantean recomendaciones de política pública para abordar la problemática.

## **8.1. Dinámicas de violencia juvenil en contextos urbanos**

---

### **8.1.1. Jóvenes y violencia organizada**

En términos generales, es posible resumir el panorama de la problemática de violencia juvenil en las ciudades analizadas a partir de dos dimensiones: de un lado, el tipo de violencia que ejercen los GVO relacionados con la violencia juvenil, y, del otro, el nivel de intensidad que tiene la violencia que ejercen estos grupos.

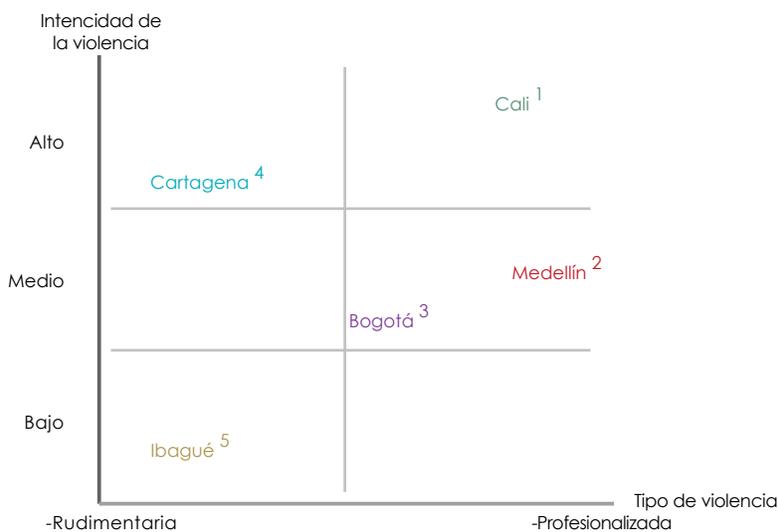
En cuanto a lo primero, el tipo de violencia está relacionado con tres variables: (1) el grado de articulación de los grupos con la criminalidad organizada; (2) el grado de precisión del objetivo de la violencia que ellos ejercen (selectivo o indiscriminado); y (3) la capacidad que tienen de ejercer violencia, de acuerdo al tipo de armamento que emplean (armas contundentes, armas blancas, armas de fuego –de hechizas a sofisticadas-).

En ese sentido, el tipo de violencia se puede enmarcar en un continuo que va desde la violencia “profesionalizada” (que tiene relación con el crimen organizado, es selectiva y emplea armas de fuego sofisticadas) hasta la violencia “rudimentaria” (que tiene poca relación con el crimen organizado, es indiscriminada y emplea en contados casos armas de fuego hechizas).

En cuanto a lo segundo, la intensidad de la violencia tiene que ver sobre todo con el grado de conflictividad evidenciado por enfrentamientos violentos entre los grupos relacionados con la violencia juvenil. Así, el nivel de intensidad puede ser alto, medio o bajo.

En síntesis, es posible agrupar las ciudades en tres categorías, de acuerdo al nivel de gravedad del fenómeno de la violencia juvenil: poco grave (violencia con baja intensidad y rudimentaria), medianamente grave (violencia con media intensidad y profesionalización) y muy grave (violencia con alta intensidad y profesionalizada).

La siguiente figura resume la situación de las ciudades de interés durante el período de estudio, de acuerdo a las dos dimensiones presentadas más atrás.



**Figura 13.** Situación de violencia juvenil en las ciudades de estudio (2008 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Entre el año 2008 y el año 2014, Cali y Medellín presentaron una problemática muy grave de violencia juvenil. La primera ciudad reportó la situación más crítica entre los casos de estudio: los GVO que allí hacen presencia se han involucrado en un álgido enfrentamiento por el control de la ciudad y han ejercido un tipo de violencia altamente profesionalizada. Mientras tanto, si bien los GVO de Medellín ostentan el mayor grado de profesionalización de la violencia entre los casos de interés, se ha observado un nivel bajo de disputa por el control de la ciudad en este período.

Por su parte, Bogotá y Cartagena tienen una problemática medianamente grave de violencia juvenil. Mientras que en la primera ciudad se han observado GVO con un nivel intermedio tanto en la profesionalización de la violencia que ejercen como en la disputa de territorios, en la segunda ciudad se ha registrado una alta conflictividad entre grupos que ejercen violencia predominantemente rudimentaria.

Finalmente, en Ibagué se observa una problemática poco grave de violencia juvenil. Los GVO que allí hacen presencia han ejercido una violencia rudimentaria y no han estado involucrados en enfrentamientos por el control de la ciudad.

### **8.1.1.1. Ciudades con un problema muy grave de violencia juvenil**

Cali y Medellín se caracterizan por la alta participación de jóvenes en la mayoría de GVO que hacen presencia en estas ciudades, así como por el alcance generalizado del fenómeno de la violencia juvenil en la mayoría de sus territorios.

En efecto, en ambas ciudades es posible observar una “carrera criminal” para los jóvenes agresores, en la que ellos comienzan como integrantes de combos y pandillas, luego son reclutados por grupos de criminalidad organizada (bandas y oficinas), en donde son entrenados en delitos de alto impacto, y luego terminan ocupando altos cargos en las estructuras de sicarios de grupos al servicio del narcotráfico o son reclutados por GPDP y grupos guerrilleros.

En estos contextos, los jóvenes agresores persiguen un patrón de “éxito” en el mundo delictivo, en el que es necesario posicionarse como los líderes del territorio bajo su influencia con el fin de escalar en la estructura criminal de la ciudad.

Adicionalmente, la problemática de la violencia juvenil afecta a la mayoría del territorio de cada una de las ciudades. En Cali, por ejemplo, hacen presencia 134 pandillas distribuidas en 17 de las 22 comunas de la ciudad, se han registrado algunos de estos grupos en barrios de estrato medio y alto, y se tiene conocimiento de 5 grupos que operan en toda la capital del Valle.

Pese a estas similitudes, es posible observar dos diferencias muy marcadas entre ambas ciudades, concernientes, por un lado, al grado de articulación de los grupos típicamente juveniles con la criminalidad organizada, y, por el otro, a los niveles de conflictividad entre estos grupos en el territorio.

En Cali las pandillas y las barras violentas están en un proceso avanzado de tránsito de estructuras tradicionales asociadas al pandillerismo hacia organizaciones cada vez más criminales y violentas. Allí se observan “pandillas tradicionales”, en las que priman los aspectos identitarios, la defensa del territorio frente a grupos rivales y la vinculación con delitos menores; pandillas similares a bandas criminales, dada su participación directa o a través de redes criminales en delitos de alto impacto; y pandillas similares a oficinas de cobro, por su especialización en dicha clase de delitos y el ofrecimiento de sus servicios a diferentes clases de clientes (narcotraficantes, guerrilleros, grupos criminales, etc).

Estas dos últimas clases de pandillas no sólo son subcontratadas por GVO del nivel “alto”, sino que además controlan a las pandillas tradicionales,

los grupos delincuenciales y las barras violentas en sus territorios de influencia y operan como intermediarias entre estos grupos y oficinas, GPD o narcotraficantes. Además, estas pandillas tienen recursos para ejercer una violencia letal, gracias a que cuentan con armas sofisticadas de corte militar como granadas y fusiles.

Por su parte, en Medellín ese proceso de tránsito ya culminó, de modo que no es posible observar pandillas tradicionales. Los GVO típicamente juveniles, es decir los combos armados, tienen una estructura, modo de operación y capacidad de ejercer violencia similar a las bandas criminales. Estos grupos tienen, además, una alta participación en el crimen organizado de la ciudad y una injerencia directa en el dominio de los territorios y poblaciones.

En cualquier caso, el nivel de disputa entre los GVO por el control de estas ciudades es el factor decisivo que diferencia estos casos de estudio y que sitúa a Cali como la ciudad con la problemática más preocupante de violencia juvenil.

En la capital del Valle se observa un recrudescimiento de la intensidad de la violencia juvenil por cuenta de la disputa por el dominio de la ciudad entre Los Urabeños y Los Rastrojos. Estos grupos han librado una guerra indirecta en la que alinean, subcontratan y fortalecen a oficinas de cobro, bandas y pandillas locales de acuerdo a sus intereses. Los GVO del nivel bajo e intermedio han aprovechado este escenario para competir y buscar doblegar a sus pares con el objetivo de fortalecer sus organizaciones y ascender en la estructura criminal de la ciudad.

En contraste con lo anterior, los GVO de Medellín han logrado establecer acuerdos tácticos, como por ejemplo el “Pacto de fusil”, para mantener bajos niveles de violencia, lo que les ha permitido recibir una menor atención por parte de las entidades estatales y maximizar el acceso a rentas ilegales derivado de su dominio de la ciudad. Sin embargo, estas alianzas son inestables y, tras su rompimiento, usualmente conllevan a un incremento de la violencia juvenil.

### **8.1.1.2. Ciudades con un problema medianamente grave de violencia juvenil**

Bogotá y Cartagena tienen como rasgo en común la participación restringida de los jóvenes agresores en la violencia organizada. En estas ciudades es mucho más frecuente que los jóvenes hagan parte de GVO del nivel bajo e intermedio que de grupos del nivel alto. Ellos participan en barras violentas, pandillas o máximo bandas criminales, ejerciendo el rol de vigilantes,

mensajeros, vendedores de droga, cobradores de extorsiones y sicariato. En todo caso, grupos armados y oficinas reclutan a jóvenes provenientes de zonas marginales de ambas ciudades.

El alcance del fenómeno de la violencia juvenil varía en cada uno de estos casos. En Bogotá la problemática está focalizada en las zonas socioeconómicamente más vulnerables de la ciudad, donde además confluyen las principales problemática de seguridad y violencia homicida asociados al crimen organizado (específicamente en las UPZ de 9 localidades). En Cartagena el fenómeno está extendido a prácticamente todo el territorio, con excepción de la zona turística, aunque es mucho más grave en la localidad 2 (La Virgen y Turística), donde se observa un fenómeno grave de marginalidad de la población.

Además, estas ciudades difieren en el grado de articulación de los GVO juveniles (en ambos casos pandillas) en el crimen organizado. Por un lado, en Bogotá se observa una transición incipiente de estos grupos hacia organizaciones más estructuradas, criminales y violentas, como resultado de una mayor intervención de grupos del narcotráfico en las actividades y formación de las pandillas.

Por otro lado, en Cartagena las pandillas están escasamente articuladas al crimen organizado, pero existe un riesgo alto de que esta situación cambie en el corto plazo y estas agrupaciones realicen un tránsito similar al de Bogotá o Cali. Ello se debe a la cooptación de las pandillas y el establecimiento de “escuelas de sicariato” en las zonas marginales de la ciudad por parte de GVO del nivel alto.

Sin embargo, la principal distinción entre estas dos ciudades, al igual que con Cali y Medellín, es el nivel de intensidad de la violencia juvenil. En Bogotá, tan sólo se ha observado una alta competencia por el control del territorio entre pandillas y bandas criminales en cuatro zonas focalizadas de las localidades de Usaquén, Suba, Kennedy y Ciudad Bolívar. En Cartagena, por el contrario, las disputas entre las pandillas son frecuentes e intensas en casi todo el territorio, pero el tipo de violencia que ellas ejercen tiende a ser rudimentario por lo que la letalidad es baja.

### **8.1.1.3. Ciudades con un problema poco grave de violencia juvenil**

Ibagué es el único caso de estudio en esta categoría. En esta ciudad las pandillas y GVO juveniles están muy desarticuladas de la criminalidad organizada y no se observa en el corto plazo un riesgo de que esto cambie. Así mismo, la participación de los jóvenes está restringida principalmente

a los grupos del nivel bajo, aunque las FARC reclutan forzosamente a jóvenes de las zonas rurales.

La ciudad también se caracteriza por bajos niveles de conflictividad entre los GVO juveniles, quienes además ejercen una violencia rudimentaria en la que prima el uso de armas blancas. Finalmente, la problemática de violencia juvenil está concentrada únicamente en la zona periurbana de Ibagué.

### 8.1.2. Situaciones críticas de violencia contra jóvenes

La siguiente tabla resume los principales hechos de violencia que más afectan a los jóvenes durante el período de estudio en cada una de las ciudades de interés.

**Tabla 1.**

*Situaciones críticas de violencia contra jóvenes en las ciudades de estudio (2008 – 2014)*

Situación crítica	Ciudad				
	Bogotá	Cali	Medellín	Cartagena	Ibagué
Asesinatos	x	x	x	x	
Desapariciones forzadas			x		
Desplazamiento intraurbano			x	x	
Violencia sexual	x	x	x	x	x
Agresiones físicas	x	x	x	x	x
Restricciones a la movilidad	x	x	x	x	
Reclutamiento forzado	x	x		x	x
Detenciones arbitrarias	x		x		x
Amenazas	x	x		x	

Fuente: elaborado por CERAC

Los asesinatos son la situación crítica de violencia que más afecta a los jóvenes en las ciudades de estudio.

Para comenzar, cabe destacar que este tipo de violencia tiene un nivel mucho más alto en las ciudades con el problema más grave de violencia juvenil. En efecto, en el 2012, según la Policía Nacional, Cali (142) y Medellín (97) tenían una tasa de jóvenes asesinados por cada cien mil habitantes mucho mayor que las demás ciudades de estudio (Bogotá -25-, Cartagena -39- e Ibagué -28) y el país (42).

En particular, es preocupante la situación de Cali. Entre 2003 y 2012, la ciudad tuvo unas tasas por encima de 100 jóvenes asesinados por cada cien mil jóvenes en cada año, y en ese período concentró el 12,3% del total de

jóvenes asesinados en el país (7.480 de 60.446). Estas tasas, que venían cayendo entre el 2003 (164) y el 2009 (119), se incrementaron durante el período de recrudescimiento de la disputa por el control de la ciudad entre GVO del nivel alto y llegaron a 142 en el 2012.

Esta ciudad es emblemática en la relación entre la violencia juvenil y los homicidios de jóvenes. Si bien no todos estos casos tienen que ver con las acciones de los GVO que allí hacen presencia, es dicente la coincidencia entre las zonas de mayor concentración de la violencia homicida juvenil y los territorios con graves problemas de pandillerismo y bandas criminales: las comunas del Distrito de Aguablanca, Ladera y el centro (Observatorio Social de Cali, 2014)<sup>78</sup>.

En parte, los homicidios de jóvenes en la ciudad tienen relación con dinámicas de la violencia juvenil: las balaceras, enfrentamientos e incursiones sicariales entre grupos rivales; la transgresión de fronteras invisibles impuestas por GVO; los ajustes de cuentas por el microtráfico; y las riñas al interior de bandas y pandillas.

En Bogotá, la violencia homicida contra los jóvenes tiene que ver mucho más con las campañas de “limpieza social” en zonas periféricas y marginales de la ciudad. En estos hechos participan sectores de la comunidad (comerciantes y líderes de JAC), así como integrantes de la Fuerza Pública, grupos de vigilancia comunitaria, oficinas de cobro y GPDP. La limpieza social afecta a jóvenes agresores y consumidores de drogas; militantes de izquierda, defensores de derechos humanos y líderes sociales; y a quienes están en el lugar y el momento “equivocados”.

En Cartagena esta violencia se ejerce principalmente en el marco de los enfrentamientos y riñas entre pandillas, así como en el desarrollo de acciones sicariales. Allí, los jóvenes que son hijos de líderes de restitución de tierras y grupos de víctimas han sido particularmente afectados por estos hechos.

Otro tipo de situación crítica de violencia contra los jóvenes en las ciudades de estudio es la violencia sexual, que afecta principalmente a mujeres y menores de edad. Pese al subregistro de este tipo de violencia en las fuentes oficiales, lo anterior se puede constatar en las cifras que reporta Medicina Legal: para el 2012, las ciudades de estudio con las mayores tasas de agresiones sexuales de mujeres jóvenes (de 10 a 25 años) por cada cien mil habitantes eran Cartagena (205) y Bogotá (197), seguidas de Medellín (185), Cali (144) e Ibagué (138).

Además de estos hechos, en todas las ciudades de estudio se presenta una grave problemática de explotación sexual y prostitución forzada de mujeres

jóvenes y menores de edad. Si bien no es posible generalizar ni relacionar directamente las acciones de los GVO que hacen presencia en las ciudades con este tipo de hechos, diferentes entidades estatales y organizaciones encargadas de la lucha contra esta problemática han destacado la presunta participación de GPDP y otras agrupaciones en las redes que participan en esta clase de explotación sexual.

En Bogotá, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo (2014) señaló que las jóvenes víctimas son inducidas a prostitución forzada por redes criminales controladas por GPDP en Bosa y Ciudad Bolívar, a través de cuatro modalidades: (1) la entrega de dinero; (2) el ofrecimiento de mejores condiciones de vida; (3) la intimidación y las amenazas; y (4) la inducción a la drogadicción. La Personería de Cali (2012), por su parte, denunció que algunas pandillas de la ciudad participan en proxenetismo, tráfico de personas e inducción a la prostitución de mujeres jóvenes.

La tercera clase de hechos violentos que afectan de forma más preocupante a los jóvenes de las ciudades de interés son las restricciones a la movilidad impuestas por pandillas, bandas y GPDP. Estos GVO prohíben la entrada a ciertos territorios (con amenaza de muerte) a grupos rivales, con el fin garantizar el acceso exclusivo a fuentes de rentas ilegales en esas zonas, y con el paso del tiempo estas “fronteras invisibles” terminan siendo reconocidas por la comunidad.

En Cali las restricciones a la movilidad afectan gravemente a los jóvenes de zonas muy afectadas por la violencia y la criminalidad, en tanto la presencia de un número elevado de GVO en algunos barrios ha conducido a una fragmentación tal del territorio (entre sectores y cuadras), que los jóvenes y habitantes de estas comunidades viven en una situación similar a un confinamiento forzado. En esta ciudad y Medellín estos hechos limitan, a su vez, el acceso de los jóvenes a bienes y servicios del Estado, como la educación y programas sociales.

En cuarto lugar es necesario destacar el reclutamiento forzado de jóvenes y la vinculación y uso ilegal de menores de edad. Una particularidad de este tipo de esta situación crítica es la participación de grupos del conflicto armado tanto guerrilleros (sobre todo las FARC) como posdesmovilización paramilitar (p.e. Los Urabeños y Los Rastrojos). Estos grupos reclutan a los jóvenes mediante cuatro mecanismos: (1) la inducción a la drogadicción; (2) la entrega de alimentos, artículos de valor y pequeños regalos para construir lealtad y confianza en los jóvenes; (3) el pago de sumas de dineros; y (4) la violencia.

Finalmente, otros hechos que afecta de forma grave a los jóvenes de las ciudades de estudio son las detenciones arbitrarias y el trato abusivo por

parte de la Fuerza Pública. En particular, de estas formas no letales de violencia, se destacan las agresiones físicas e intimidaciones en el marco de acciones de registro y control por parte de la Policía, así como las “batidas ilegales” de jóvenes que no han logrado resolver su situación militar.

## 8.2. Factores de riesgo y protección frente a la violencia juvenil

### 8.2.1. Vulnerabilidad frente a la violencia organizada

Los resultados que presenta el libro en torno a los factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la opción de vincularse a GVO, permiten establecer un diálogo con las principales escuelas teóricas que abordan la problemática de la violencia juvenil desde un enfoque individualista, que se presentaron en el estado del arte del Capítulo 2.

En primer lugar, se ratifica el consenso al que llegaron autores como Rodgers y Jones (2009) en torno a la naturaleza multicausal del fenómeno de la violencia juvenil. En ese sentido, a lo largo de este documento se ha denominado “encadenamientos de influencias” a los factores que se articulan para hacer a los jóvenes de las ciudades de estudio mucho más vulnerables frente a la violencia organizada. Estos encadenamientos causales pueden sintetizarse en cinco modelos explicativos: *familias disfuncionales*, *búsqueda de protección*, *satisfacción de estilos de vida*, *necesidad de provisión de bienes en el hogar*, y *drogadicción*.

El primer modelo establece un diálogo con la escuela de la teoría psicosocial de la violencia juvenil. Más allá de asumir que la articulación de los jóvenes a la violencia organizada es un comportamiento anómico o antisocial, en lo que llegan a un acuerdo este libro y dicha teoría es en la importancia que tiene las falencias de la institución social de la familia para que los jóvenes decidan ser agresores o iniciar una carrera criminal en GVO.

En particular, cuando los hogares no operan como un entorno protector exponen a los jóvenes a una mayor influencia frente a la criminalidad e incrementan su vulnerabilidad en cuanto a la decisión de vincularse a grupos armados, organizaciones criminales o pandillas. Esto ocurre en los hogares que cumplen algunas de estas características: (1) hay permisividad en los padres o en quienes ejercen posiciones de autoridad en la familia frente a la criminalidad y la violencia; (2) no hay acompañamiento ni apoyo en la construcción del proyecto de vida de los hijos ni supervisión de las actividades que ellos realizan y sus amistades; y (3) hay abuso de autoridad y casos de violencia intrafamiliar.

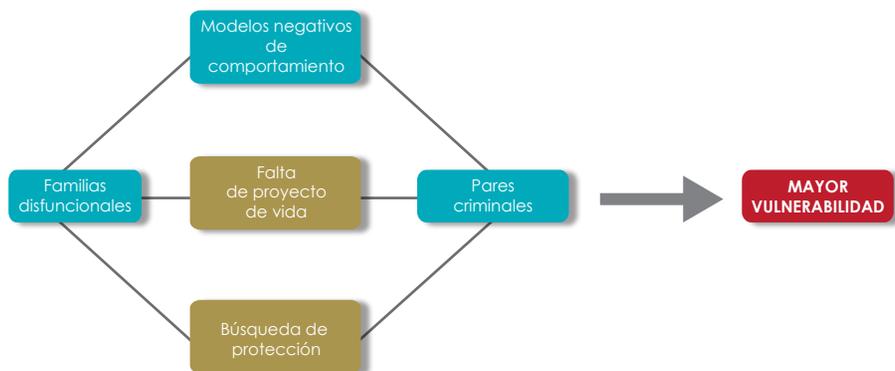


Figura 14. Modelo explicativo asociado a familias disfuncionales

Fuente: elaborado por CERAC

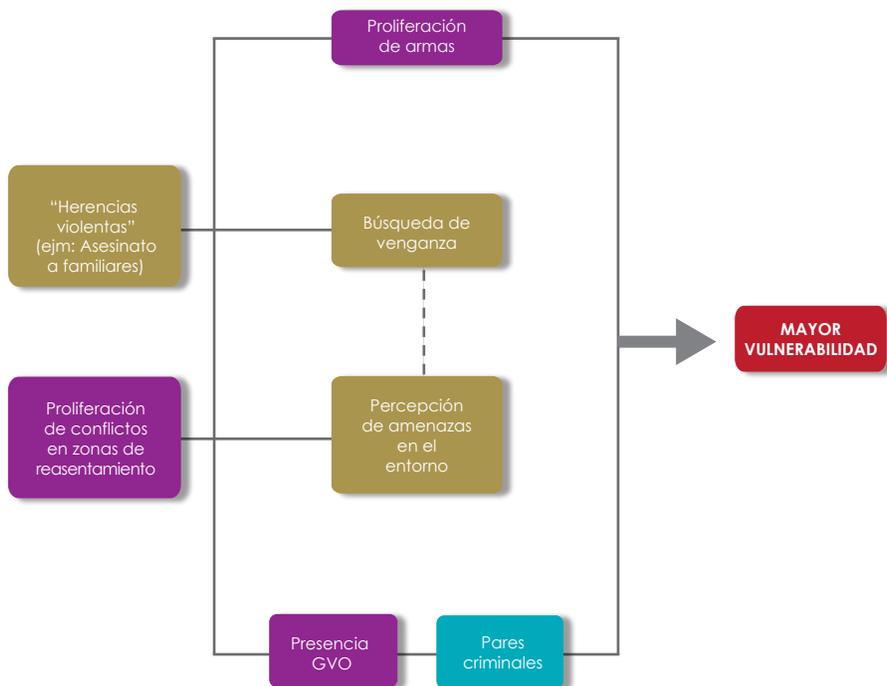
El segundo modelo, búsqueda de protección, está de acuerdo con los teóricos que plantean que la violencia tiene una utilidad para los jóvenes. En efecto, en las ciudades de estudio se encontró que en entornos con serias problemáticas de seguridad, los jóvenes pueden ser más propensos a vincularse a GVO cuando perciben una amenaza contra sus vidas en donde habitan o encuentran en la violencia una oportunidad para resolver sus conflictos personales.

En dichos contextos, la pertenencia a un GVO se convierte en una de las pocas opciones de los jóvenes para resguardarse frente a un entorno hostil.

En este barrio si usted no participa de una pandilla no es, por ejemplo, aquí operan los lecheros y cuando salga a coger el bus lo van a atacar, así que le toca ser de la banda. Se vinculan por fuerza porque las fronteras lo obligan (...) Para sobrevivir toca cuidarse uno mismo la espalda, entre compañeros. (Personería de Cali, 2014, p.21)

Además, los jóvenes pueden ver a los GVO como un medio para resolver de forma violenta sus conflictos personales. En esta clase de barrios de las ciudades de estudio, es frecuente que existan altos niveles de conflictividad social y falencias en la convivencia, que son asumidos por los jóvenes, y que son susceptibles de ser tramitados de forma violenta, dada la proliferación de armas de fuego, y la presencia de GVO.

En síntesis, en ambas situaciones, la violencia organizada puede ser percibida por los jóvenes como una vía para asegurar su supervivencia y alcanzar sus objetivos.



**Gráfico 15.** Modelo asociado a la búsqueda de protección

Fuente: elaborado por CERAC

El tercer modelo también está a favor de la teoría de la utilidad de la violencia. En las ciudades analizadas se encontró que tienden a ser vulnerables a optar por ser parte de GVO los jóvenes que buscan satisfacer estándares de vida asociados a una “cultura de la ilegalidad” a través de actividades violentas y delictivas.

En Cali y en Medellín, donde los carteles de narcotráfico tuvieron una notable influencia en los valores y las relaciones sociales, los jóvenes de barrios marginales están expuestos a una “cultura de la ilegalidad” en la que priman dos valores: el consumo de bienes y servicios costosos y de difícil acceso para estos jóvenes y la pérdida del valor de la vida. Según las personas entrevistadas en estas ciudades, en parte, la decisión de algunos jóvenes de involucrarse con GVO tiene que ver con la búsqueda de acceso a este estilo de vida.

En esa situación, otros factores, como el tiempo libre no ocupado en actividades productivas, familias disfuncionales y pares criminales, operan como una cadena de influencias que facilitan la decisión de los jóvenes a favor de la violencia organizada.



**Figura 16.** Modelo asociado a la de satisfacción de estilos de vida

Fuente: elaborado por CERAC

El cuarto modelo discute con las teorías que explican la violencia juvenil desde la desigualdad y las desventajas sociales.

Al igual que otros estudios (p.e. Solarte, 2010), en la investigación no se encontró evidencia a favor de una relación directa entre la pobreza y la decisión de los jóvenes de vincularse a GVO. Sin embargo, la situación en la que los jóvenes tienen que asumir el rol de proveedores en sus hogares, como resultado de la vulnerabilidad económica de sus familias, aunada a otros factores de riesgo, sí se identificó como determinante en la trayectoria de vida de los jóvenes agresores.

Usualmente, esto ocurre cuando quienes ejercen la figura de autoridad en los hogares tienen serias dificultades para insertarse laboralmente en la ciudad. La presión que reciben los jóvenes para iniciar su vida laboral a temprana edad (10 a 15 años) los hace más propensos a participar activa o esporádicamente en actividades delictivas, ante la premura de las necesidades materiales que afrontan. En particular, aquellos jóvenes que han desertado del colegio y tienen dificultades para conseguir empleo son mucho más vulnerables, sobre todo cuando reciben ofertas de actividades ilegales por parte de GVO.



**Gráfico 17.** Modelo asociado a la necesidad de proveer recursos en el hogar

Fuente: elaborado por CERAC

El último modelo no es susceptible de ser comparado a la luz de las teorías de la explicación de la violencia juvenil encontradas en el estado del arte. En el estudio se encontró que en un contexto de presencia de redes y grupos criminales que venden droga, los jóvenes adictos al consumo de estas sustancias suelen estar en un nivel alto de riesgo de involucrarse en GVO.

De hecho, GPDP, bandas y pandillas inducen a los jóvenes a la drogadicción para facilitar su vinculación en las actividades criminales que ellos controlan. Les ofrecen de forma gratuita una pequeña dosis de droga en parques públicos o en sus colegios para crear la adicción. Luego de que han logrado formar esa conducta en los jóvenes, y ante la carencia de recursos para financiar su necesidad de consumo, les ofrecen la oportunidad de articularse a la cadena del microtráfico como vendedores, en el mismo lugar donde fueron contactados.

De igual forma, los jóvenes que han sido inducidos a la adicción pueden ser más propensos a participar en hurtos, asesinatos y otros tipos de actividades realizadas por GVO, con el fin de satisfacer su necesidad de consumo.

A manera de cierre y en línea con los teóricos que evidencian la utilidad que puede llegar a tener la violencia para los jóvenes, se puede reafirmar que la participación de los jóvenes en GVO es un comportamiento racional en contextos donde estas agrupaciones proveen beneficios y oportunidades que los jóvenes no encuentran en sus hogares, comunidades o el Estado.

Así mismo, lo anterior evidencia que si bien los jóvenes tienden a ser instrumentalizados por organizaciones criminales, ellos también usan la violencia organizada para satisfacer sus intereses personales.



**Figura 18.** Modelo asociado a drogadicción

Fuente: elaborado por CERAC

### 8.2.2. Resiliencia frente a la violencia organizada

En correspondencia con los hallazgos presentados en la sección anterior, se identificaron dos factores que hacen más resilientes a los jóvenes de las ciudades de estudio frente a la opción de vincularse a GVO: las familias

que operan como entornos protectores, de un lado, y las intervenciones en materia de prevención de la violencia juvenil, así como las organizaciones y colectivos juveniles, del otro.

Los jóvenes que pertenecen a familias cohesionadas y con sistemas de autoridad funcionales tienen posibilidades de rechazar la opción de participar en acciones de violencia organizada, porque sus familias operan como entornos protectores y redes de apoyo que les ofrecen: (1) modelos positivos de comportamiento; (2) acompañamiento en la construcción de planes de vida; y (3) supervisión en el uso de su tiempo libre y en la construcción de sus redes sociales.

Por su parte, los jóvenes que son beneficiarios de iniciativas de prevención de la violencia o que hacen parte de grupos y redes juveniles también pueden ser más resilientes frente a la decisión de involucrarse en la violencia organizada.

Lo anterior se debe, en primer lugar, a que esta clase de iniciativas y agrupaciones proveen alternativas a los jóvenes para la toma de decisiones frente a la violencia y la criminalidad: (1) les ofrecen una amplia variedad de actividades que ocupan “positivamente” su tiempo libre, atacando un factor de riesgo clave frente a la vinculación a los GVO; (2) les forman habilidades que los fortalecen en lo laboral, en el nivel educativo, en el conocimiento de sus derechos, etc.; (3) les proveen referentes positivos de comportamiento; (4) les permiten ejercer liderazgos positivos; y (5) les permiten conocer otros entornos y modelos de vida, lo que facilita la posibilidad de construir proyectos de vida diferentes a la violencia.

### **8.2.3. Factores de riesgo para ser víctima de violencia**

En general, la mayoría de la población que reside en barrios con graves problemas de inseguridad en las ciudades de estudio, está sujeta a la posibilidad de ser víctimas de agresiones físicas, asesinatos, restricciones a la movilidad, etc. Sin embargo, tienden a estar en un nivel especial de riesgo los jóvenes en tres tipos de situaciones que se explicarán a continuación.

En primer lugar, aquellos jóvenes que realizan prácticas estigmatizadas en la comunidad (p.e. el consumo de drogas o la pertenencia a subculturas urbanas) en sitios públicos “peligrosos”, ya sea por la presencia de GVO y agentes que ejercen violencia contra los jóvenes, o por el desarrollo de actividades criminales en esos lugares.

En particular, se identificaron tres sitios que representan un riesgo alto para estos jóvenes: primero, los colegios públicos y sus alrededores. Allí se

observan puntos de venta de droga, controlados por GVO, redes dedicadas al tráfico de mujeres y niñas para la prostitución forzada, y son lugares donde se reúnen y enfrentan barras violentas de fútbol y pandillas.

En ese sentido, en estos sitios los jóvenes enfrentan la amenaza de ser hurtados o agredidos físicamente por pandillas y bandas criminales; ser lesionados en el marco de los enfrentamientos entre GVO como las barras violentas; ser inducidos a la drogadicción y por esa vía ser reclutados forzadamente o vinculados a grupos criminales; e incluso, ser víctimas de prostitución forzada.

Segundo, los parques públicos son sitios peligrosos porque también son punto de encuentro de pandillas, bandas y barristas, así como de venta de droga. En los parques, los jóvenes con el perfil mencionado se enfrentan ante las mismas amenazas señaladas más atrás, pero además están ante el riesgo de sufrir tratos arbitrarios por parte de la Policía.

Finalmente, las estaciones y CAI de Policía representan un lugar de riesgo para los jóvenes con el perfil mencionado en zonas marginalizadas de las ciudades, puesto que allí pueden ser víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias o amenazas por parte de agentes estatales.

En segundo lugar, tienden a estar en un nivel mayor de riesgo de ser víctimas los jóvenes que tienen un perfil de liderazgo, cuando por el ejercicio de sus acciones son percibidos por GVO como una amenaza para sus intereses estratégicos.

En concreto, el trabajo de líderes puede ser percibido como un riesgo para los intereses estratégicos de los GVO, en tres clases de situaciones: (1) si se dirige a ofrecer opciones para el cambio en la trayectoria de vida de jóvenes agresores con roles importantes dentro de las estructuras de estos grupos (líderes de sicarios, vendedores de droga, etc.); (2) si afecta las actividades económicas de los grupos, mediante la denuncia de delitos cometidos por bandas y pandillas (como el microtráfico); y (3) si pone en riesgo el interés de ejercer control sobre la población que tienen algunos de estos grupos, mediante las denuncias de las violaciones a los derechos humanos que ellos realizan.

En tercer lugar y para terminar, en contextos de dominio de los GVO y de internalización de normas tácitas impuestas por ellos en las comunidades, la resistencia que pueda poner un joven de la comunidad, a través de la contravención directa o indirecta de dichas reglas, puede potenciar el riesgo. Al subvertir el orden, el principal riesgo es sufrir represalias impuesta por los GVO, que buscarán por medio de la violencia mantener ese control que ejercen.

Así mismo, en ese contexto, la interacción cotidiana (y obligada) de los jóvenes con los integrantes de combos, bandas y pandillas puede conllevar a que existan conflictos interpersonales entre los jóvenes que no están involucrados y aquellos que sí lo están. Estos conflictos pueden incrementar notablemente el perfil de riesgo de los jóvenes no agresores que se involucran en ellos.

#### 8.2.4. Factores de protección frente a la violencia

Para finalizar esta sección, en la investigación se identificó como un factor común de protección en las ciudades de estudio la pertenencia a organizaciones y redes juveniles, toda vez que este tipo de iniciativas no sean percibidas como una amenaza para los GVO que hacen presencia en los territorios.

Esto tiene que ver con el grado de aceptación y reconocimiento que tienen algunas de estas organizaciones y agrupaciones en la comunidad, y entre los jóvenes agresores. Además, con la construcción de mecanismos de protección colectiva que apuntan a la identificación y comunicación de riesgos a sus participantes por parte de estas iniciativas.

En general, aunque tienen un alcance limitado, estos factores mitigan un poco las amenazas que enfrentan los jóvenes en contextos de alto riesgo, por lo que es posible plantear que los jóvenes más vulnerables frente a la violencia son aquellos que no tienen conexiones ni redes de apoyos como éstas.

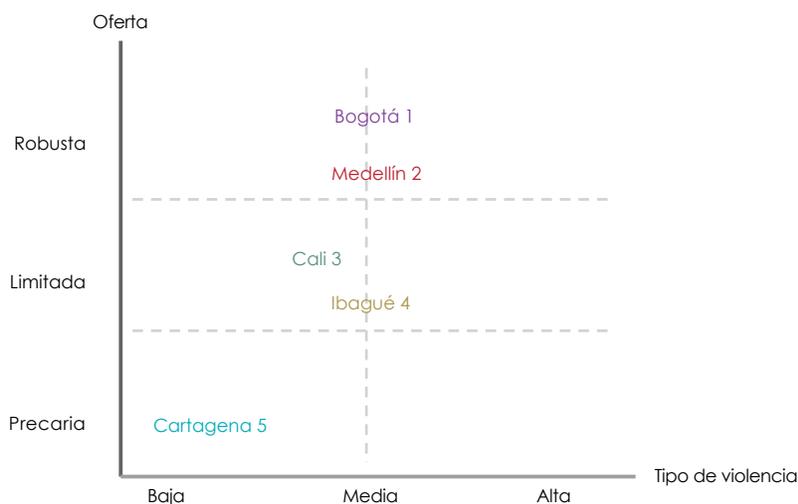
### 8.3. Infraestructura de prevención de la violencia: alcances y limitaciones

---

En términos generales, es posible resumir el panorama de la infraestructura de prevención de la violencia juvenil instalada en las ciudades de estudio, a partir de dos dimensiones: de un lado, la oferta de iniciativas de prevención de la violencia en comparación con la magnitud de la problemática. Frente a lo cual, se pueden establecer tres categorías: robusta (si es un número considerable frente a la problemática), limitada (si no es un número suficiente frente a la problemática) y precaria (si es un número muy bajo frente a la problemática)<sup>79</sup>.

De otro lado, la efectividad percibida de las iniciativas para prevenir la persistencia del fenómeno. Aunque es muy difícil evaluar esta dimensión, se pueden plantear tres categorías de análisis: baja efectividad, media efectividad y alta efectividad.

La siguiente gráfica resume la situación de las ciudades de interés durante el período de estudio, de acuerdo a las dos dimensiones presentadas más atrás.



**Figura 18.** Infraestructura de prevención de la violencia juvenil en las ciudades de estudio (2008 – 2014)

Fuente: elaborado por CERAC

Así, en síntesis se observa que Bogotá y Medellín tienen una infraestructura muy similar, de carácter robusto pero con una mediana efectividad. Cali e Ibagué también tienen características en común, una oferta de iniciativas limitadas con un alcance medio. Finalmente, Cartagena tiene la infraestructura con mayores problemáticas; precaria en cuanto a la oferta de iniciativas y con muy baja efectividad.

### 8.3.1. Bogotá y Medellín

Estas ciudades tienen una infraestructura robusta en tanto concentran la mayoría de las iniciativas de prevención de la violencia identificadas en la investigación entre el período 2008 y 2014.

De estas dos, el liderazgo lo tiene Bogotá: el 51,7% de las iniciativas (102 de 197) operan en la capital del país, ciudad que, como se mencionó en la primera sección, tiene una situación medianamente grave de violencia juvenil. De ahí que se pueda afirmar que, incluso, hay una sobreoferta de iniciativas de prevención frente a la dimensión de la problemática que en la ciudad se afronta.

Medellín tiene el segundo lugar en términos de robustez entre los casos de estudio: el 43,1% de las iniciativas registradas (85 de 197) operan en

esta ciudad. No obstante, la problemática de Medellín es mucho más preocupante que la de Bogotá, por lo que se esperaría que ella recibiera una mayor atención en materia de prevención.

En cuanto a efectividad, ambas ciudades han presentado importantes avances durante el período de estudio. En primer lugar, tanto Bogotá como Medellín han tenido un importante desarrollo institucional en la atención de los jóvenes, mediante la implementación de la PPJ: se han creado mecanismos de participación de los jóvenes (como el Presupuesto Participativo en Medellín o el CDJ en Bogotá); se han creado entidades municipales encargadas de la atención directa de esta temática; y se han establecido los lineamientos normativos para que la prevención de la violencia juvenil pueda abordarse desde un enfoque acompañado por una política social a favor de los jóvenes.

Adicionalmente, las iniciativas de prevención de la violencia juvenil que en estas ciudades se ejecutan realizan una priorización acertada de las poblaciones objetivo, así como atienden factores de riesgo presentes en cada una de las ciudades, como por ejemplo, la drogadicción, el mal uso del tiempo libre, la falta de formación laboral, etc.

Finalmente, en los dos casos de estudio se observa un sector comunitario muy fuerte y robusto que trabaja el tema de juventud desde el esfuerzo de colectivos, parches y organizaciones juveniles, así como ONG de base. Muchas de estas iniciativas apuntan a los factores de riesgo mencionados anteriormente, como por ejemplo el desarrollo de habilidades y el ofrecimiento de alternativas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes, así como la recuperación de espacios públicos por parte de la comunidad. En todo caso, las actividades, objetivos y resultados de estas iniciativas son de difícil caracterización, dada la falta de información disponible sobre estos temas.

A pesar de estos avances, Bogotá y Medellín han tenido serias limitaciones en la prevención de la violencia juvenil.

En el caso de la primera ciudad, se ha observado un retroceso en una de sus principales fortalezas: la PPJ. En ese sentido, se ha observado un proceso de “securitización” y mayor énfasis en el componente represivo que en el preventivo en el manejo del tema de los jóvenes; casos de corrupción y clientelismo en el manejo de la política, lo que la ha llevado a un replanteamiento estratégico en la actual administración; y problemas de falta de liderazgo, recursos insuficientes, dificultades en la articulación de las diferentes entidades estatales y entre el nivel distrital y el local, así como falencias en el funcionamiento del CDJ.

Además, ambas ciudades han tenido dificultades en la institucionalización de las iniciativas comunitarias, y la apertura de espacios de interlocución con el Estado ha favorecido casos de clientelismo, acaparamiento de dichos espacios por parte de organizaciones expertas en las licitaciones públicas (“juventólogos”), competencia desleal entre las organizaciones, etc. Estas iniciativas, además, afrontan problemas de falta de sostenibilidad de los procesos.

Por último, tanto las entidades estatales como los actores de los demás sectores de la infraestructura de prevención de ambas ciudades se han visto limitadas en su actuación por problemas de seguridad y criminalidad en los territorios donde operan. Esta situación es más preocupante en Medellín que en Bogotá.

### 8.3.2. Cali e Ibagué

Estas ciudades tienen en común una oferta limitada de iniciativas en comparación con las problemáticas de violencia juvenil que afrontan.

Es necesario resaltar que Cali está mucho peor que Ibagué, en tanto es la ciudad de estudio con la situación más grave de la violencia ejercida por los jóvenes y contra ellos. Así, aunque el 39,5% de las iniciativas identificadas (78 de 197) operan en la ciudad este esfuerzo en materia de prevención es insuficiente.

Ibagué está en la situación contraria de Cali, tiene una oferta limitada porque si bien tiene un número de iniciativas mucho menor que los demás casos de estudio (concentra sólo el 22,4%, 44 de 197), también la problemática que afronta es menos grave que en el resto de ciudades.

En términos de efectividad, los avances tienen que ver con un desarrollo normativo e institucional favorable similar al de los casos de estudio pasados, así como con la existencia de un fuerte sector comunitario en el caso de Cali, muy efectivo y con un gran potencial de prevención de la violencia juvenil en territorios limitados a barrios o máximo sectores más grandes de las comunas.

Las limitaciones también son similares a los casos anteriores: en Cali, énfasis en el enfoque represivo de la violencia juvenil (que se explica por la magnitud de esta problemática en la ciudad), dificultades en la articulación entre los sectores relacionados con la infraestructura, y falta de planeación, recursos y liderazgo en la ejecución de las iniciativas estatales.

Adicionalmente, en ambas ciudades se presentan problemas de sostenibilidad en las iniciativas privadas, comunitarias y de ONG nacionales, así como casos de corrupción y clientelismo en algunas de estas organizaciones.

Finalmente, en Cali también se presenta un grave problema de limitación al alcance de las iniciativas de todos los sectores por cuenta de las acciones violentas de los GVO, como por ejemplo las amenazas a los operadores o la existencia de restricciones a la movilidad impuestas por estos grupos en los territorios de interés de los actores institucionales.

### 8.3.3. Cartagena

Esta ciudad tiene la infraestructura más débil de los casos de estudio. En términos de oferta, es precaria la cantidad de iniciativas registradas en la ciudad (28,4%, 56 de 197) frente a la problemática de violencia que afrontan los jóvenes cartageneros.

Además, a diferencia del resto de casos analizados, en esta ciudad no se reportan importantes avances en la prevención de la violencia juvenil, por lo que la efectividad de esta infraestructura ha sido muy baja. Por el contrario, las administraciones locales no han reconocido la magnitud del fenómeno de la violencia juvenil en la ciudad y la falta de gobernabilidad de las últimas administraciones ha impedido cualquier progreso en la implementación de la PPJ.

Adicionalmente, se han observado dificultades para trabajar en red entre los diferentes sectores involucrados en la infraestructura y las acciones de los GVO han limitado el trabajo de ONG, fundaciones e incluso entidades estatales, al igual de lo que sucede en Cali y Medellín.

## 8.4. Recomendaciones para afrontar y prevenir la violencia juvenil

---

Para finalizar, es posible plantear tres recomendaciones de política pública para la prevención de la violencia juvenil en las ciudades de Colombia, a la luz de la situación observada en los casos de estudio.

En primer lugar, las dificultades que han tenido todos los actores de la infraestructura para prevenir de forma efectiva la violencia juvenil en ciudades como Medellín, donde se han realizado importantes esfuerzos en esta materia, da cuenta del reto que implica atender esta problemática cuando los GVO juveniles han hecho un tránsito hacia organizaciones del crimen organizado y cuando los jóvenes agresores se han involucrado de lleno en todos los grupos que tienen presencia en la estructura criminal de una ciudad.

En este tipo de escenarios, que es la situación que se presenta actualmente en Cali y hacia donde se perfila Bogotá (en zonas focalizadas) y en el

mediano plazo Cartagena, el sólo esfuerzo de prevención no es suficiente por más integral que sea. Allí, se deben complementar estas medidas con acciones encaminadas a la desarticulación de las organizaciones criminales, así como a la depuración en las entidades estatales y la Fuerza Pública de prácticas de corrupción y convivencia con los actores criminales. Estas entidades también deben ser intervenidas en el mejoramiento de los estándares de respeto a los derechos fundamentales de los jóvenes agresores y estigmatizados.

Adicionalmente, los esfuerzos de prevención deben ir más allá de los jóvenes en riesgo de convertirse en agresores: se hace urgente el diseño de programas integrales que permitan a jóvenes que ya estén involucrados en GVO rehabilitarse y reintegrarse a sus comunidades.

En ese orden de ideas, el principal indicador de éxito de un programa nacional de prevención de la violencia juvenil tendría que ser prevenir que los GVO juveniles hagan un tránsito definitivo hacia grupos organizados de crimen y violencia. Así mismo, otros de sus objetivos serían lograr la desarticulación de los GVO juveniles, y potenciar los colectivos y las agrupaciones no violentas de los jóvenes.

En segundo lugar, la situación de ciudades como Cartagena e Ibagué evidencia que los esfuerzos actuales del Estado y la sociedad en su conjunto para prevenir la violencia juvenil son insuficientes y precarios. Es muy paradójico que estas dos ciudades, en las que es posible implementar programas que atiendan este fenómeno con un énfasis mucho más preventivo que represivo (dado que su situación aún no es tan problemática) sean las que tienen la infraestructura de prevención más débil entre los casos de estudio. Eso da cuenta de que las autoridades civiles de todos los niveles, como en otros casos, no son proactivas en la atención de este fenómeno antes de que emerja como un asunto de seguridad ciudadana, sino que esperan a que este se convierta en un problema inmanejable para pensar tardíamente en su prevención.

Así, se puede concluir que hasta este momento el tema de la violencia juvenil no se ha posicionado en la agenda pública de Colombia, con excepción de las ciudades donde este fenómeno ha tomado una dimensión preocupante, como Cali y Medellín.

Por último, algunos aspectos exitosos de la implementación de la PPJ en Bogotá y Medellín, en específico la ejecución de las iniciativas de prevención en el marco de una política social que ha logrado mejorar las condiciones de jóvenes vulnerables, invitan a reflexionar sobre el alcance de los esfuerzos estatales para la atención preventiva de esta problemática.

Aunque las iniciativas de pequeña escala pueden ser significativas para ciertos territorios y poblaciones, puede ser mucho más efectivo un programa estatal de alcance nacional que tenga un enfoque integral, de largo plazo, en el que se busquen atender factores de riesgo como: la falta de acceso a educación básica, secundaria y superior; las dificultades de los jóvenes para insertarse laboralmente en las ciudades; la debilidad de las familias en su función de proveer entornos protectores a los jóvenes; los riesgos que tienen los jóvenes para ser víctimas de violencia en colegios públicos, los hogares, los parques públicos, entre otros.

